

Delincuencia rural, una amenaza para la seguridad alimentaria

Crímenes cada vez más violentos y sofisticados, ya no solo realizados por delinquentes comunes, sino por bandas organizadas, están golpeando duramente a los territorios, con impactos que van mucho más allá de lo económico y que, hasta ahora, poco se ven.

Los de los dos agricultores asesinados en Malloa, en enero de 2024, para robarles el dinero de sus ventas de tomates; el del matrimonio de Graneros asesinado a tiros en su casa, en marzo de 2025; o el de Curacavi, donde en agosto pasado mataron a una persona en su parcela, ya no son casos aislados, sino que son parte de una nueva realidad rural en donde la delincuencia se vuelve cada vez más intensa y adquiere características que antes no se veían, transformadas por la llegada del crimen organizado.

Eso significa que los delitos que hoy sufren las comunas rurales ya no son las peleas, alcoholismo y ebriedad, o violencia intrafamiliar (que siguen existiendo). Son situaciones que están golpeando en su forma de vida y, con ello, amenazando la producción de alimentos que abastece a todos los habitantes de nuestro país y que lo posiciona de manera internacional. Y, tan grave como lo anterior, amenazando a la identidad profunda de los chilenos.

Santo Domingo es una comuna rural costera de la V Región. Muchos de sus habitantes cultivan la tierra, produciendo hortalizas que se distribuyen en la zona o, incluso, llegan a Santiago. Según los datos de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, en Santo Domingo, en 2018 hubo 6 delitos asociados a armas. En 2024, se elevaron a 24, un 300% más. En Talagante, comuna rural de la Región Metropolitana, en 2018 se

El crimen organizado, a través de bandas de alta sofisticación, ya está cambiando la realidad de los territorios rurales. El impacto no es solo para las localidades, sino que abre la puerta a la pérdida de la identidad nacional e incluso podría impactar en la inversión y desarrollo y arriesgar la capacidad productiva y la imagen de Chile como proveedor global de alimentos.

PATRICIA VILDÓSOLA ERRÁZURIZ



FRANCISCO JAVIER OLEA

registró un solo homicidio. En 2024, la cifra se disparó a 11. Un aumento de 1.000%, en seis años.

Si bien 24 u 11 pueden parecer cantidades menores respecto a lo

que ocurre en las comunas urbanas, especialmente las de la Región Metropolitana, si se comparan con ellas mismas muestran cómo la delincuencia rural se

ha convertido en una situación incontrolable y creciente en esas zonas y frente a la cual los alcaldes y autoridades locales cuentan con pocas herramientas y que tiene un impacto directo no solo en las economías y calidad de vida locales, alejando la inversión, y abriendo la puerta para cambios profundos en lo que son los chilenos.

Es parte de lo que deja el estudio "El avance de la criminalidad en los territorios rurales. Un estudio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins", encargado por la Asociación de Municipios Rurales, Amur, y realizado por la experta en seguridad doctora Pilar Lizana, a partir de datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Lo que muestra, dice Pilar Lizana, son "dos cosas sumamente importantes: las profundas diferencias que hay entre una zona rural y una zona urbana en cuanto a la respuesta que debe tener el Estado en materia de seguridad y, además, las capacidades tan distintas que tienen en las zonas rurales respecto de las urbanas".

Se refiere a cómo la distinta estructura territorial, geográfica y social de las zonas rurales respecto de las urbanas, las hace más vulnerables y con necesidades distintas, que hoy no se están considerando.

"Por ejemplo, un vehículo policial

que en una zona urbana puede ser muy útil porque permite responder con rapidez a una emergencia, en una zona rural muchas veces no es eficiente por las distancias y tipos de caminos. Por ejemplo, la comuna de San Pedro de Melipilla tiene 800 kilómetros cuadrados, aproximadamente 8 veces Las Condes, y sin olvidar que la estructura vial también es menos desarrollada eso complejiza el control y la prevención. Entonces, ese vehículo policial que en Las Condes es sumamente eficiente, porque en cosa de minutos llega a los lugares; en las extensiones rurales como las de San Pedro de Melipilla no tiene el mismo resultado."

Para Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y alcalde de Paine, los resultados entregados por el estudio son concordantes con lo que desde hace ya un tiempo se viene detectando en esos territorios, pero que no ha sido percibido por las autoridades centrales.

"Esto es una forma de decirles a las autoridades centrales que cuando miren el índice delictual deben compararlo no con las capitales regionales, sino con nosotros mismos. Porque, por ejemplo, el microtráfico de Talagante y Melipilla de hace cinco años, ahora pasó a ser narco tráfico. El robo de vehículos, antes inexistente en Santa Cruz, hoy es pan de cada día. Todo tiene un denominador común: la falta de institucionalidad. También otras carencias. En Paine tenemos solo cuatro carabineros y dos retenes", recalca Contreras.

LAS CAUSAS DEL DESBORDE

De acuerdo con la definición de

Comunas con mayor variación % en delitos asociados a armas

Variación 2018-2024

VALPARAISO



SANTIAGO



O'HIGGINS



Fuente: Avance de la criminalidad en los territorios rurales... a partir de datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

territorio rural de la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que está según los estándares de la OCDE, los territorios rurales son los que tienen menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con un máximo de 50 mil habitantes, y cuya unidad básica de organización es la comuna. En Chile, eso significa que el 83% del territorio es rural o mixto (de las 356 comunas que tiene el país, 263 son rurales o mixtas) y que ahí vive el 25% de su población.

Pero, aunque la población no sea mucha, se trata de territorios que cumplen funciones esenciales desde lo económico, cultural y de preservación de las tradiciones e identidad nacional. "En este sentido, el mundo rural no es solo un espacio geográfico, sino también un componente esencial en la solidez institucional del Estado y en la proyección del país hacia el futuro", plantea Lizana en el estudio.

Desde lo económico, en estos territorios no solo se genera una intensa actividad —que responde al 22% del PIB—, sino que se produce el alimento para Chile y el mundo, que además ayuda a posicionar la imagen del país en el exterior.

Y desde lo cultural, explica el informe, no se puede obviar que en esos territorios es donde se mantienen las tradiciones que dan origen a la chilenuidad y el acervo cultural que nos identifica.

Sin embargo, a estas zonas les juega en contra que tienen serios desafíos que se transforman en la puerta de entrada al crimen organizado.

"El mundo rural presenta características estructurales específicas que son aprovechadas por la criminalidad organizada, la cual encuentra en estos espacios un entorno propicio para establecer refugios, ocultar operaciones y coordinar actividades ilícitas. Este proceso ha generado un cambio cualitativo en el escenario de seguridad rural, marcado tanto por el incremento de la violencia como por la irrupción de tipologías delictivas tradicionalmente asociadas a contextos urbanos, tales como secuestros, portonazos y delitos vinculados al uso de armas de fuego", señala el estudio.

El primero de ellos es que estos territorios son superficies extensas, con baja densidad poblacional, con

800%
crecieron los delitos asociados a drogas en Mostazal.

650%
aumentó la receptación en Doñihue. 450% en María Pinto.

263
de las 356 comunas del país son rurales o mixtas, el 83% del territorio.

camino aislados la mayor parte no pavimentados, con escasa densidad poblacional, dotaciones policiales bajas para la superficie que se debe cubrir, sin tecnología que permita una vigilancia adecuada o un seguimiento rápido de un acto delictual. Esto las ha convertido en un espacio fértil para que las bandas criminales no solo actúen de manera impune, sino que incluso instalen allí sus cuarteles.

Así hoy se registra no solo el mismo tipo de violencia de las ciudades,

sino que se ha desarrollado una "economía ilícita en crecimiento, sustentada principalmente en el robo de insumos agrícolas y agroindustriales, maquinaria, producción, infraestructura eléctrica y de comercio ilícito", analiza el documento. Lo anterior es lo que vienen planteando ya desde hace un tiempo organizaciones como AFIPA, en un intento de evitar que esto genere daños a los productores y cultivos.

De hecho, en marzo de 2025, la SNA publicó la primera encuesta de robo agrícola en la que el 78% de los encuestados dijo que había sido robado en los últimos 12 meses e incluso el 40% indicó que había sufrido tres o más robos en ese período. Estos actos significaron pérdidas de US\$ 380 millones al año.

Y se habla de crimen organizado porque los actos son cometidos con alto nivel de organización, coordinación y sofisticación, que considere el uso de drones y vigilantes para preparar los actos criminales. EL estudio plantea que "llama la atención la creciente sofisticación de las organizaciones delictivas dedicadas al robo de bodegas y predios, grupos predominantemente de origen nacional, estos muestran gran coordinación y uso de tecnología en sus métodos para obtención de información estratégica destinada a la planificación y ejecución de actividades ilícitas. Estas estructuras cri-

minales han desarrollado capacidades avanzadas de inteligencia territorial, orientadas a recopilar datos clave sobre las condiciones operativas y de seguridad de los terrenos que buscan robar".

El otro factor que está generando la presencia de estas bandas es que la presión creciente que se está realizando en las zonas urbanas para controlarlas, las empuja a buscar nuevos terrenos desde donde actuar. A ello se suma que las zonas rurales son una oportunidad para comercializar con mayor facilidad productos ilícitos o robados, como lo que ocurre con insumos agrícolas.

En Calle Larga, comuna rural de la Región de Valparaíso, en donde viven 16 mil personas, trabajan en distintas actividades, incluidas distintas labores agrícolas. Como comuna rural, la gente vivía tranquila, los problemas delictuales eran menores. Sin embargo, en los últimos años sufren encerronas o consecuencias de ellas, que les llegan desde Colina y Chicureo. Esto, dice Contreras, es un reflejo de cómo las comunas rurales de la V y la VI Región se han convertido en las zonas periféricas de la Región Metropolitana.

Finalmente, la debilidad institucional del Estado en las zonas rurales es otro de los factores clave que facilitan la delincuencia, plantea el estudio. Esto porque no solo hay escasez de contingencia y herramientas policiales, sino porque los vecinos ven en el municipio la solución, sin embargo estos no cuentan con recursos, incluso les falta departamento de seguridad para enfrentar estos problemas.

Cuando se habla de falta de institucionalidad, se refiere también a que uno de los principales problemas para frenar el avance delictual en las zonas rurales es la ausencia de una tipificación de qué constituye un delito rural y de criterios diferenciadores para el tratamiento penal según el territorio. Pilar Lizana destaca que en el estudio se vio que existen a nivel internacional políticas públicas diferenciadas para el territorio rural: "En 2022, Reino Unido tuvo una situación similar a la que se está dando en Chile en los últimos años. Una de las conclusiones de ellos fue que se requería tener politi-

cas específicas".

La urgencia de entregar herramientas para que los territorios rurales puedan detener el avance de la delincuencia es no solo por el impacto económico, sino por la trascendencia que tiene el territorio para la identidad nacional. "La chilenuidad más profunda vive en el mundo rural y eso es lo que hay que proteger, porque desde ahí se construye territorio y cohesión social".

QUÉ SE NECESITA

Fue a través de visitas a terreno, entrevistas con alcaldes y otras autoridades, además de los mismos habitantes y otros actores del mundo rural, junto con la revisión de las cifras, información de prensa y experiencia comparada internacional como se fue configurando el estudio. De ahí también surgieron cuáles son las necesidades que tienen estas zonas para lograr enfrentar la situación.

El estudio permitió identificar tres grandes desafíos para la seguridad en los territorios rurales: fortalecer las capacidades locales en seguridad; cerrar las brechas jurídicas; contar con una institucionalidad de seguridad local.

Pilar Lizana comenta que uno de los elementos que resaltó es que las comunas rurales no cuentan con capacidades institucionales suficientes para enfrentar el tema, ni en infraestructura ni personal calificado.

A diferencia de lo que ocurre en las comunas urbanas, que cuentan no solo con personal policial sino con equipos de seguridad propios, las comunas rurales no los tienen. Tampoco tienen pódicos lectores de patentes, que permitan hacer un control de vehículos con encargo por robo. "Esta carencia resulta particularmente significativa en un contexto donde los accesos al territorio son limitados y podrían, mediante un control efectivo, constituirse en puntos críticos para las acciones preventivas", comenta el estudio.

A ello se agrega contar con personal calificado, operadores de cámaras de vigilancia, o expertos en servicios de seguridad, y sumar las capacidades tecnológicas, como los pór-

SIGUE EN PÁGINA 6

LOS TIPOS DE CRÍMENES

Pilar Lizana plantea que uno de los temas que se vio fue que el incremento de la violencia en la delincuencia común no solo aumentó sus niveles, sino también sumó las nuevas tipologías criminales que, si bien venían creciendo en los centros urbanos, antes no se registraban en los rurales. "Este fenómeno se inserta en la evolución nacional de la criminalidad organizada" comenta.

El estudio realizó un análisis, a partir de los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por tipos de crímenes que más crecen, respecto de lo que ocurrían antes en esas mismas comunas, dividiéndolos en tres macrocategorías: Violencia, criminalidad compleja y delincuencia común. No hay que olvidar que en las zonas rurales hay mucho delito que no se denuncia, por lo que podría haber una cifra que no se puede considerar.

Dentro de la categoría violencia, en las tres regiones consideradas, los homicidios presentan alzas significativas en Colina y Melipilla, con 133% y 175% cada una;

rectamente a las más pequeñas).

Pilar Lizana destaca que para el habitante rural, el alcalde es la figura de máxima autoridad y a quien ven como la solución de los problemas. Por ello "las herramientas de gestión y la institucionalidad municipal en seguridad tienen una altísi-

ma importancia", dice.

Reconoce que esto implica recursos económicos importantes, que las comunas no suelen tener.

"Necesitamos inversión, claro que sí, pero se pueden ir buscando respuestas que permitan abordar la mayor cantidad de urgencias. Lo

además del 1.000% de Talagante, entre 2018 y 2024. En tanto en Buin, Colina, Concón, Limache, Lampa y Mostazal predomina el robo de vehículo motorizado. Solo en Mostazal creció en un 400%.

Por criminalidad compleja se entienden los delitos asociados a drogas, armas y receptación. Aquí los datos mostraron que 34 de las 76 comunas que forman la macrozona centro presentan aumentos de más del 100% en delitos asociados a armas. Mostazal (800%), San Pedro (400%), La Estrella (300%), Juan Fernández (200%) y Litueche (100%), presentan aumentos significativos de los delitos asociados a las drogas entre 2018 y 2024. En cuanto a la receptación, las comunas de Calle Larga (250%), María Pinto (450%) y Doñihue (650%) son las con mayores aumentos de sus regiones. En cuanto a delincuencia común, el estudio plantea que son pocos los aumentos llamativos. Donde se da es en comunas pequeñas, que no habían sido consideradas focos de criminalidad, como La Estrella, Peumo, Lolol, Marchigüe, La Ligua, Nogales, San Pedro y Chimbarongo.

primero es diseñar las políticas *ad hoc* para cada territorio. Pero, al mismo tiempo, esto debe pensarse de manera coordinada. Partir por etapas, priorizando los temas en los que se va a invertir primero. Aquí la tecnología puede ser un gran aliado que va a permitir abordar y desde

ahí generar una inversión y coordinación. Se podría, por ejemplo, integrar tecnológicamente la infraestructura que tengan distintas comunas. Lo importante, es tomar las acciones para frenar una situación que ya impacta de manera muy dañina a estos territorios".

Rodrigo Contreras, en representación de los alcaldes de comunas rurales, resalta que aquí es clave considerar que son esenciales para el país y que requieren que sean miradas tal como se hace con las urbanas. "Tenemos que tener una mirada distinta para ver cómo resolvemos esto. Efectivamente, los tiempos cambiaron. Pero, por ejemplo, no me saquen a los carabineros para el partido del fin de semana, como ocurre. Esto es una responsabilidad de todos, también del mundo privado. No contenerlo significa perder la identidad rural, que es el patrimonio de nuestro país", enfatiza.

VIENE DE PÁGINA 5

ticos, e incluso drones que puedan ayudar a detectar y a vigilar.

En cuanto a las brechas jurídicas, para comenzar a cerrarlas, el presidente de la Amur considera esencial la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal. "Los municipios han trabajado para encontrar algún tipo de solución o alternativa para resolver de alguna manera las necesidades de seguridad. El proyecto lleva más de un año esperando a ser votado en la Cámara". Ella haría posible que los municipios tengan mayores atribuciones y elementos de protección para sus guardias.

Acortar esta brecha permitiría que las comunas rurales cuenten con una definición de delito rural, agilizar la reposición de suministros para enfrentar este tipo de situaciones (se realiza de acuerdo a la densidad poblacional, lo que impacta di-